



Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

General Roca, de agosto de 2022.

VISTOS:

Estos autos caratulados **"Recurso de Queja de AFIP-DGI en autos: 'AFIP-DGI por Evasión Simple Tributaria'"** (Expte. N° FGR 10258/2021/1/RH1); y,

CONSIDERANDO:

1. Que la AFIP-DGI dedujo recurso de queja a raíz de la inadmisibilidad decidida por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche del recurso de apelación formulado por esa administración contra el auto de primera instancia que resolvió suspender la acción penal e interrumpir el curso de la prescripción en el expediente FGR 10258/2021 hasta tanto se verificase el cumplimiento total o la caducidad del plan de facilidades de pago P366269 que fue consolidado el 30/09/2021 por la empresa *"Bebidas del Lago S.A."*.

2. Que la queja fue presentada dentro del plazo del art.477, párrafo primero, del CPP.

3. Que para una cabal comprensión de la materia debatida se hace preciso reseñar los hechos que precedieron a esta queja. Así, según las constancias acompañadas por la presentante, las actuaciones se iniciaron el 22/12/2021 a raíz de la denuncia formulada por los representantes de la Dirección Regional Neuquén de AFIP-DGI contra Jorge Marcelo Zubillaga, en su carácter de presidente de la firma *"Bebidas del Lago S.A."*, por la posible comisión del delito de evasión tributaria (art.1 del RPT, ley 27.430), respecto del ejercicio fiscal 2019 correspondiente al Impuesto a las Ganancias por la suma de \$8.443.731,62 y del ejercicio fiscal 2019 del Impuesto al Valor Agregado por la suma total de \$5.113.792,47. Luego,



mediante providencia del 27/12/2021, el Juzgado delegó la instrucción de la causa al MPF (art.196 del CPP) y el 30/12/2021 le requirió a la denunciante que informase *"si el Plan de Pagos RG 4268 8, identificado como P 366269, suscripto por la firma denunciada, abarca la totalidad de la deuda y si se encuentra vigente"*. Frente a ese requerimiento, el organismo recaudador informó el 5/1/2021 que el referido plan se encontraba vigente pero que no comprendía la totalidad de la deuda ya que los períodos 08/2018 y 02/2019 del Impuesto al Valor Agregado había sido incluidos de manera parcial. Luego, el 21/2/2022 el MPF solicitó la suspensión de la acción penal y la interrupción del curso de la prescripción *"debiendo solicitar a AFIP- DGI que informe sobre la posible cancelación o incumplimiento del plan de facilidades de pago referido"*, lo cual fue acogido favorablemente por el Juzgado lacustre en el auto del 15/3/2022.

Con posterioridad, el 23/5/2022 se presentó la AFIP- DGI solicitando en el carácter de víctima damnificada conocer el estado de las actuaciones, copia de la sentencia en caso de recaer sentencia condenatoria y la devolución de los antecedentes administrativos. Ante ello, la *a quo* proveyó dicha presentación el 10/6/2022 y sostuvo, a partir de la cita de lo decidido por esta alzada en autos *"TECRAN S.A."* (sent.int.935/2021), que sin perjuicio de que la condición de víctima había sido rechazada, le hacía saber que se había resuelto la suspensión de acción penal e interrumpido el curso de la prescripción hasta tanto se verificase el cumplimiento total o la caducidad del plan de facilidades de pago P366269, consolidado el 30/9/2021 por la empresa *"Bebidas del Lago"*





Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

S.A." así como "que en la misma fecha se le comunicó al organismo que debía informar inmediatamente a la Fiscalía Federal la cancelación total de las cuotas, caducidad o cualquier modificación respecto del plan de facilidades de pago referido".

4. Que contra esa decisión la AFIP-DGI dedujo recurso de apelación por entender que la resolución cuestionada había sido dictada sin respetar el debido proceso y aplicando de manera errónea la ley sustantiva, todo lo cual le quitaba legalidad al pronunciamiento y le causaba un grave perjuicio a esa administración. En esa tarea insistió en su condición de víctima y sujeto pasivo del delito investigado en razón de que el bien jurídico protegido no era exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a su actividad recaudatoria.

Más adelante, a partir de la cita de doctrina y de jurisprudencia, en particular de lo decidido por la sala IV de la CFCP en el citado "Trecan S.A." en el que anuló la sentencia de esta alzada, afirmó que esa parte tenía legítimo derecho a requerir la revisión de la decisión adoptada en virtud de su condición de víctima. En otro orden, expresó su disconformidad con la suspensión de la acción penal y la interrupción de la prescripción decididas en tanto explicó que la RG4268/2018 –en cuyo marco la contribuyente se acogió al plan de facilidades– carecía de efectos suspensivos.

5. Que, así las cosas, la *a quo* declaró inadmisibles la apelación tras considerar que la recurrente carecía de legitimación para intentar la vía escogida, por cuanto el organismo fiscal representante de la Hacienda Pública nacional



no poseía condición de víctima en un proceso penal en los términos de la ley 27.372.

Asimismo, señaló que aun otorgándole a la ley la interpretación amplia que invocaba la AFIP, la solución que se imponía era la decidida por cuanto, en primer lugar, el art.5, inciso m), de la ley 27.372 otorgaba a la víctima el derecho a solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, *“cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante”*, por lo que la víctima no se encontraba facultada a recurrir en cualquier condición la decisión del acusador público, sino sólo –y únicamente– cuando asumió previamente la condición de querellante lo que no se verificaba en el caso. Además, apuntó que no veía cómo podría avanzar en el proceso sin la intervención del MPF, máxime si la AFIP-DGI no había asumido la condición de querellante ni manifestado su voluntad en tal sentido.

Finalmente, apuntó en cuanto a la prerrogativa que concedía el art.5, inc.k) de la referida ley que no había sido solicitado ello por la recurrente y que tampoco era vinculante su opinión.

6. Que en su presentación directa la AFIP-DGI sostuvo que lo resuelto debía ser revocado por cuanto se fundaba en una errónea interpretación y aplicación de las normas procesales, en violación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso, lo que le quitaba legalidad al pronunciamiento y causaba un grave perjuicio a la Administración Federal de Ingresos Públicos.





Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

Luego, tras reseñar los antecedentes del caso, afirmó que lo decidido se apartaba de los antecedentes jurisprudenciales existentes y en el capítulo V de la presentación insistió en su calidad de víctima y sujeto pasivo del delito investigado en función del bien jurídico tutelado.

Más adelante, aclaró su postura respecto de la, a su entender, incorrecta interpretación otorgada por la *a quo* a los alcances del plan de facilidades de pago otorgado a la contribuyente en el marco de la Resolución AFIP Nro. 4268/2018.

A su término indicaron que, "[e]n definitiva, al resolver el juez de grado la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por esta representación, evita que su decisión arbitraria e irrazonable sea revisada por el tribunal superior, consolidando una afectación al debido proceso".

Hizo reserva de caso federal.

7. Que una reseña de lo acontecido en función de las piezas acompañadas en esta instancia evidencia que la apelación ha sido bien desestimada y que, por lo tanto, corresponderá rechazar la queja.

Ello así se considera no ya por negarle al organismo recurrente su condición de víctima, sino porque sencillamente el art.80, inc.h) del CPP prescribe que ésta tendrá derecho "a solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante". Sin embargo, en el caso bajo examen la decisión que se pretendió recurrir mediante la apelación declarada inadmisibile no resolvió la desestimación de la denuncia o el archivo. A lo que se añade, como lo apuntó la jueza de la instancia de



origen, que el inciso f) del citado dispositivo también le confiere la prerrogativa de *"ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente"*, condición esta última que no satisfizo la quejosa.

Por último, cabe destacar que aún de habilitarse las vías intentadas por el organismo recaudador, frente a la postura del MPF, titular de la acción pública, no hay modo de imponerle la prosecución de la acción (art.120 de la CN).

8. Que, por lo expuesto, corresponderá rechazar la queja, con costas (art.531 del CPP).

Por lo expuesto, **EL TRIBUNAL RESUELVE:**

I. Rechazar la queja articulada por la denunciante AFIP-DGI, con costas;

II. Registrar, notificar, publicar y remitir al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.

